

Ediciones EL PAcCTO

Los Delitos Ambientales en la Cuenca del Amazonas: el rol del crimen organizado en la minería

ADRIANA ERTHAL ABDENUR, ANA PAULA PELLEGRINO, CAROL VIVIANA PORTO Y LYCIA BRASIL

Los Delitos Ambientales en la Cuenca del Amazonas: el rol del crimen organizado en la minería

ADRIANA ERTHAL ABDENUR, ANA PAULA PELLEGRINO, CAROL VIVIANA PORTO Y LYCIA BRASIL



Edita: Programa EL PAcCTO
Calle Almansa 105
28040 Madrid (España)
www.elpaccto.eu

Con la coordinación de:



Publicación realizada con el apoyo de



Instituto Igarapé

Edición no venal
Madrid, abril 2019



No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

ISBN: 978-84-09-11889-2

Esta publicación ha sido elaborada con la financiación de la Unión Europea. Su contenido es solo responsabilidad del programa «EL PAcCTO» y no refleja necesariamente las opiniones de la Unión Europea.

Contenido

Resumen ejecutivo	7
Contexto	9
Desarrollo	11
I. Seguridad y medio ambiente en la Amazonía	11
Definiendo la Amazonía	11
El cambio climático y la Amazonía	12
Mecanismos de combate al crimen organizado en la Amazonía	13
II. Los delitos ambientales	14
III. El crimen organizado en la Amazonía	16
El narcotráfico en la Amazonía	16
El tráfico humano	18
IV. La minería ilegal en la Amazonía.....	18
Los impactos	20
V. Los impactos socioeconómicos de los delitos ambientales.....	22
Conclusiones	33
Recomendaciones de actuación futura	35
Bibliografía	37

LOS DELITOS AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL AMAZONAS: EL ROL DEL CRIMEN ORGANIZADO EN LA MINERÍA

Resumen ejecutivo

En la última década, el crimen organizado se ha expandido en la cuenca amazónica, y sus vínculos con los delitos ambientales se han intensificado. Aunque la región ha sido durante mucho tiempo vulnerable frente a actividades como el tráfico de drogas, armas y personas, la explotación forestal y la explotación ilegal de la fauna y la flora (incluida la madera), durante la última década ha visto el crecimiento de la minería ilegal como una fuente de ingresos central para las organizaciones criminales. Además de crear nuevos bolsones de pobreza, exclusión social y degradación del medio ambiente —sobre todo en áreas indígenas—, la minería ilegal abre espacio para la violencia en todas sus formas, desde grupos armados hasta la explotación sexual y homicidios.

Los lazos entre el crimen organizado y los delitos ambientales son complejos. Las redes y organizaciones criminales contribuyen con la deforestación y la contaminación del suelo, aire y agua, mientras que la deforestación aumenta la vulnerabilidad a las acciones del crimen organizado. Este círculo vicioso se ve agravado por los efectos del cambio climático, especialmente a través de cambios en los patrones de precipitación que regulan el sistema ecológico de la región.

Los impactos socioeconómicos de estas actividades son especialmente visibles en las tierras protegidas, pero también afectan a poblaciones vulnerables en las ciudades y municipios del Amazonas, como indígenas y comunidades afrodescendientes tales como los quilombos en Brasil y comunidades en Colombia. Al mismo tiempo, los crímenes a menudo son enmascarados por el lavado de dinero (incluso por medio de los bitcóins) y la corrupción de actores locales, estatales, nacionales e internacionales.

Para combatir este fenómeno, es necesario actuar tanto a nivel nacional como internacional. Además de proteger los bosques y recursos hídricos a través de la legislación adecuada y de instituciones bien capacitadas, los países individuales deben empoderar a sus fuerzas de seguridad, mecanismos de inteligencia y sistemas judiciales en los esfuerzos por desarticular las redes del crimen organizado en la Amazonía. Por toda la región, la acción preventiva es tan necesaria como la reacción ágil a los diferentes tipos de actividades llevadas a cabo por las pandillas, carteles, grupos de vigilantes y otras configuraciones ilegales.

A nivel internacional, se necesita una cooperación más robusta en todos los frentes, desde la armonización de los enfoques policiales y judiciales hasta un mayor intercambio de conocimientos entre los miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. También hay espacio para una mayor cooperación con otros actores, tales como Interpol y Europol.

En todas estas áreas, la incorporación de la sociedad civil, especialmente las organizaciones indígenas y de poblaciones tradicionales, es esencial para identificar, analizar y monitorear los retos y los esfuerzos para combatir el crimen organizado y el crimen ambiental en la Amazonía. Por fin, sin la colaboración del sector privado, el combate al crimen organizado y sus lazos con los delitos ambientales no puede avanzar.

Contexto

En mayo de 2016, el Gobierno peruano declaró estado de emergencia de 60 días en 11 distritos de la región amazónica de Madre de Dios, ubicada cerca de la frontera con Brasil y Bolivia¹. La zona produce alrededor del 20% del oro que se explota en Perú. Más de 180 toneladas de mercurio, usado para extraer oro, son arrojadas anualmente al suelo, al aire y al agua del territorio de ese departamento², contaminando los ríos y la fauna, y poniendo en peligro la salud de la población local. Según el viceministro peruano de salud, se estima que unas 50.000 personas en Madre de Dios pueden estar expuestas a los altos niveles de mercurio³. El impacto es particularmente fuerte en las comunidades indígenas. Un estudio encontró en el pelo de los indígenas machiguenga de la comunidad Maizal, ubicada en el Manu, 27 partes por millón (ppm) de mercurio (el límite máximo permisible por la Organización Mundial de la Salud, OMS, es de 1 ppm).

Al mismo tiempo que crece la minería ilegal en la región, el área también se convierte en nueva ruta de drogas, con organizaciones del narcotráfico peruano utilizando el Parque Nacional del Manu, una de las reservas ecológicas más importantes de planeta, como ruta para el transporte de cocaína⁴. Además del narcotráfico, la «fiebre del oro» en Madre de Dios arrastra a mafias de explotación laboral y sexual infantil, entre otras bandas que actúan en la región con impunidad⁵. Las categorías de delitos están entrelazadas de formas complejas y se retroalimentan, especialmente en zonas de intensa deforestación.

El caso de Madre de Dios ilustra algunos de los principales retos asociados a la minería ilegal y, de forma más amplia, a la intersección entre los delitos ambientales y el crimen organizado en la Amazonía. Los cambios en la región demuestran como un complejo ecosistema de organizaciones, redes e individuos alrededor de la minería ilegal puede perjudicar a la sociedad en varios niveles, desde individuos a comunidades y ciudades. De forma más amplia, tales actividades contribuyen al cambio climático, sobre todo los patrones de lluvia cada vez más impredecibles, al mismo tiempo que el cambio climático intensifica transformaciones demográficas a través de la migración.

Aunque el ejemplo de Madre de Dios sea extremo, está lejos de ser el único. Los delitos ambientales en la Amazonía se intensifican, y los lazos con el crimen organizado, en casi todas sus modalidades, contribuyen a la expansión y diversificación de las actividades ilícitas y los impactos socioeconómicos negativos. ¿Cuál es la extensión del problema, y cómo funcionan los lazos entre el crimen organizado y los delitos ambientales en la Amazonía? Este *paper* ofrece un diagnóstico inicial y cualitativo de la cuestión, concentrándose en la minería ilegal en la cuenca del Amazonas y su efecto sobre las poblaciones locales, con destaque para los indígenas y comunidades tradicionales. Basado en el análisis cualitativo, el *paper* también ofrece recomendaciones para que la lucha contra los impactos de tales actividades sea más efectiva.

Entre las observaciones están los siguientes puntos clave:

¹ BBC Mundo (2016).

² Escobar (2018).

³ BBC Mundo (2016).

⁴ Latina Redacción (2018).

⁵ Anesvad (2014).

- a) El crimen organizado y los delitos ambientales están entrelazados de formas complejas, pero la deforestación es un elemento común que produce y exagera todo tipo de efecto nocivo sobre otras dimensiones del medio ambiente y de la sociedad local.
- b) Tales vínculos son bastante heterogéneos, tanto en términos de su configuración como del punto de vista de su distribución espacial.
- c) Aunque el crimen organizado y los delitos ambientales afecten a toda la región, las comunidades indígenas y tradicionales de la Amazonía son las más vulnerables a ese fenómeno.
- d) Aunque los vínculos entre el cambio climático y el crimen organizado en la Amazonía aún sean poco conocidos, los factores de estrés multiplican la deforestación y pueden exagerar los vínculos entre la degradación ambiental, la migración y la violencia en la región.
- e) Para tornar la lucha contra tales delitos más eficaz, es necesario mapear, analizar y entender mejor las dinámicas que aparecen en varios puntos de la Amazonía.

El trabajo está estructurado en tres partes. La primera parte ofrece una visión general del papel del crimen organizado y sus vínculos con los delitos ambientales, especialmente en torno a la minería ilegal. Luego, el *paper* ofrece una tipología de los impactos sociales de tales actividades, concentrándose en las poblaciones indígenas y las comunidades tradicionales de la Amazonía. Por último, la conclusión presenta recomendaciones para que políticas públicas sean más efectivas, tanto desde el punto de vista preventivo como del reactivo.

Desarrollo

I. Seguridad y medio ambiente en la Amazonía

Definiendo la Amazonía

La Amazonía se refiere a una subregión sudamericana compartida por ocho países independientes —Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela— y un departamento de ultramar francés, la Guyana Francesa. El área corresponde a cerca de 7,5 millones de kilómetros cuadrados, lo equivalente a 40% del territorio sudamericano. La región tiene gran importancia no solamente debido a su biodiversidad sino también a la abundancia de los recursos energéticos e hídricos, los minerales, y las maderas y pulpas, entre otros factores. La región abarca la mayor floresta tropical continua de la tierra, la más rica en biodiversidad de la masa continental mundial y en agua dulce de superficie. Su principal río, el Amazonas, es el mayor del planeta en volumen de agua, con más de siete mil afluentes⁶. Debido a su ecosistema, la Amazonía es uno de los principales reservorios de carbono y de recursos hídricos del planeta —uno de los «pulmones de la Tierra»—.

Imagen 1. Mapa de la Amazonía



⁶ Global Forest Atlas (2018).

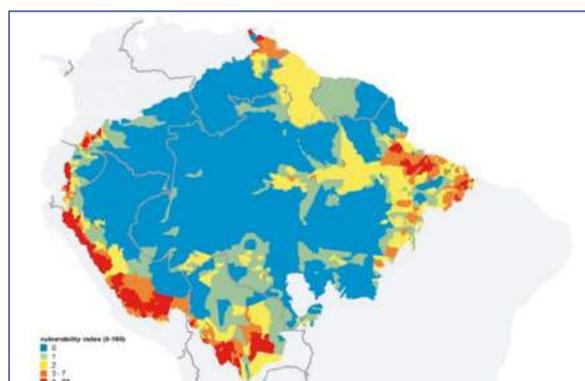
Esta región estratégica es también altamente vulnerable a los riesgos del medio ambiente, cambio climático y seguridad. Hasta el presente, las acciones humanas ya degradaron aproximadamente el 20% de la floresta. Para algunos científicos, la destrucción de la Amazonía ya pasó de un punto sin vuelta, lo que provoca impactos profundos en la manutención de todo el ecosistema de la floresta y de su entorno⁷.

Al mismo tiempo, desde mediados del siglo xx, esta vasta región ha experimentado una rápida urbanización, incluso el surgimiento de grandes regiones metropolitanas. Hoy la población de la cuenca del río Amazonas se estima en aproximadamente 30 millones de habitantes. La mayoría de las personas se concentran en áreas urbanas a lo largo del río y sus afluentes principales (Iquitos, Leticia, Manaus, Río Branco, Porto Velho, Boa Vista y Macapá, entre otros). En toda la cuenca hay cinco ciudades con más de un millón de habitantes cada una y tres adicionales con más de 300.000 personas cada una⁸.

El cambio climático y la Amazonía

Prácticamente toda la Amazonía es vulnerable al cambio climático, específicamente a través de alteraciones a los padrones pluviales. El cambio climático y la Amazonía están relacionados de dos maneras. Por un lado, al almacenar enormes cantidades de carbono, la región ejerce un papel fundamental en el balance climático. Los cambios en las reservas de carbono debido a la deforestación se pueden convertir fácilmente en emisiones de CO₂, contribuyendo de manera secundaria para el cambio climático⁹. Por otra parte, tanto las investigaciones anteriores como los modelos climáticos de escenarios futuros indican que el cambio climático tiene impactos profundos sobre los ecosistemas y las sociedades de la región amazónica. El aumento de la temperatura, el cambio en los patrones de precipitación, y la proliferación de eventos extremos, junto con otros factores de cambio (tales como las diferentes formas de explotación de los recursos naturales), provocan la pérdida de la biodiversidad y la extinción de las especies en la región¹⁰. Además, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) sugiere que las inundaciones asociadas con el aumento del nivel del mar tendrán impactos sustanciales en áreas de tierras bajas como el delta del río Amazonas¹¹. La imagen 2 ilustra las áreas de la Amazonía más vulnerables al cambio climático:

Imagen 2. **Vulnerabilidad al cambio climático en la Amazonía**



Fuente: Conservation International, 2017¹².

⁷ Lovejoy y Nobre (2018).

⁸ FAO, UN (2015).

⁹ Informe IPCC (2013).

¹⁰ Informe IPCC (2014).

¹¹ WWF.

¹² Neugarten (2017).

A pesar de que aún no se conozcan bien los vínculos entre el cambio climático y la seguridad, existe un consenso cada vez mayor entre especialistas de que los factores de estrés del cambio climático multiplican las vulnerabilidades que pueden conducir a altas tasas de violencia y conflictos sociales.

Además del cambio climático y la fragilidad de las instituciones estatales, también contribuyen para la expansión del crimen y de la violencia los cambios demográficos, los modelos de desarrollo centrados en grandes proyectos de infraestructura, las fronteras porosas y de difícil monitoreo y la urbanización desordenada.

La escala y la organización de esas dinámicas varían inmensamente, desde individuos y familias, pasando por cooperativas y otros arreglos colectivos, hasta grandes corporaciones que dañifican el medio ambiente. En un contexto tan complejo, con la presencia de actores transnacionales tales como empresas multinacionales; traficantes de drogas, personas, fauna y flora; y mineros (entre muchos otros), la gobernabilidad del territorio es tarea difícil que requiere no solamente abordajes efectivos a nivel nacional, sino también la profundización de la colaboración regional.

Mecanismos de combate al crimen organizado en la Amazonía

Los mecanismos creados para la protección de la Amazonía tienen origen en preocupaciones con la defensa y soberanía de los Estados de la región, sobre todo durante la Guerra Fría, y hacen parte de la tendencia de securitización de la Amazonía. En un primer momento, tales mecanismos no eran direccionados al combate del crimen organizado. A finales de la década de 1960, el Gobierno brasileño elaboró el Programa de Integración Nacional, que pretendía mantener la seguridad de la Amazonía a través de la incorporación a la dinámica económica del país. En 1985, el Gobierno de José Sarney lanzó el proyecto Calha Norte, que tenía como objetivos principales la delimitación de fronteras, el apaciguamiento de los conflictos entre colonos e indígenas, la vigilancia del tráfico aéreo y fluvial y, por primera vez, el combate al narcotráfico.

Poco a poco, los países de la región fueron desarrollando algunos mecanismos para el monitoreo de y combate al crimen organizado en la Amazonía. En 1990, fue creado en Brasil el Sistema de Protección de la Amazonía (SIPAM), que incorpora a la seguridad nacional el tema de la seguridad ecológica y las preocupaciones estratégico-militares con respecto al tráfico internacional de drogas. El SIPAM sería el coordinador de las políticas estatales brasileñas para la región amazónica, puesto que concentraba el análisis de los datos obtenidos a través de las imágenes captadas por teledetección. Actualmente el SIPAM está asociado al Sistema de Vigilancia de la Amazonía (SIVAM), que tiene como principal objetivo garantizar la seguridad del espacio aéreo de la Amazonía Legal brasileña.

Entre las principales iniciativas de cooperación internacional alrededor de la Amazonía, se encuentra la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que surgió a partir del acuerdo regional firmado en 1978 por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Ese instrumento jurídico busca promover el desarrollo armónico e integrado de la cuenca, como base de sustentación de un modelo de complementación económica regional que contemple el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y la conservación y utilización racional de sus recursos. Sin embargo, a pesar de los encuentros de jefes de Estado y ministros de relaciones exteriores y de actividades frecuentes, la organización no ha alcanzado la fuerza política necesaria para alcanzar a sus objetivos.

En 1997, el Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, conocido como Grupo de Río, presentó una propuesta ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para crear un instrumento capaz de facilitar la cooperación regional contra el tráfico ilícito de armas.

Al año siguiente, la convención entró en vigor. El documento buscaba «tipificar como delitos la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego; requerir el marcaje de las armas de fuego; confiscar o decomisar las armas que hayan sido objeto de tráfico ilícito; establecer un sistema de licencias o autorizaciones de exportación, importación y tránsito internacional para las transferencias de armas de fuego; intercambiar experiencias, promover la asistencia legal mutua para la investigación y facilitar la extradición de presuntos responsables».

Además de esta convención, el 25 de junio de 2003 se creó el Plan Andino para la prevención, combate y erradicación del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. El Plan establece que el tráfico ilícito de armas constituye una grave amenaza a la paz, a la estabilidad y al orden democrático de los países miembros de la Comunidad Andina. Sin embargo, a pesar de que existan estos tratados regionales de cooperación contra el tráfico de armas, los logros se quedan en el plano discursivo y la falta de cooperación entre los países impide el avance de estas políticas.

II. Los delitos ambientales

A pesar de que el concepto de delito ambiental varíe entre los países de la región, hay elementos en común en las definiciones adoptadas por los Estados de la Amazonía. Antes que nada, los delitos ambientales son reconocidos como crímenes sociales, en el sentido de que afectan las bases de la existencia social y económica; atentan contra las materias y recursos indispensables para las actividades productivas y culturales; ponen en peligro las formas de vida autóctonas, e implican la destrucción de sistemas de relaciones hombre-espacio¹³.

Por toda la región, desde el punto de vista legal, los delitos ambientales constituyen una preocupación relativamente reciente. La ley de crímenes ambientales de Brasil fue aprobada en 1998; la de Bolivia, en 1992. En Colombia, los delitos ya previstos fueron actualizados y se agregaron nuevas categorías en 2011. (Para obtener una explicación más detallada de cómo las definiciones de delitos ambientales varían en la región, consulte el anexo I).

Los delitos ambientales contribuyen a la degradación ambiental en la Amazonía de diversas formas. En primer lugar, los impactos ocurren por medio de la deforestación, que a su vez es motivada por diversos factores. La exploración ilegal de la madera y de otros recursos forestales, la agricultura y el ganado, la construcción de infraestructuras y la minería están entre los principales factores que impulsan la deforestación en la Amazonía. Muy a menudo, la minería ilegal implica la construcción de pistas de aterrizaje, alojamientos, y el transporte de maquinarias y equipamientos tales como dragas y retroexcavadoras. Innovaciones tecnológicas adoptadas por el crimen organizado muchas veces contribuyen a la degradación ambiental. En las zonas mineras de Colombia, por ejemplo, proliferan nuevas máquinas, llamadas «dragones brasileños», versiones más potentes de las tradicionales dragas con enorme potencial de daño debido al poder de sus motobombas. Los buzos artesanales barren el lecho de los ríos con los tubos de esos aparatos gigantescos en busca del oro. Además de succionar el suelo, arrastran también a las plantas y peces, destruyendo los ecosistemas subacuáticos.

En muchos lugares de la Amazonía, la selva húmeda acaba fragmentada o transformada, con grandes claros de tierras muertas. En Colombia, el Sistema de Monitoreo Antinarcóticos de la Policía (Sima), que utiliza alta tecnología para ubicar las zonas con cultivos ilícitos y minería clandestina, ha identificado en todo el país 6.330 puntos en donde se saca oro de aluvión. Sus reportes de inteligencia señalan que hay 95.000 hectáreas «con total afectación» por efectos de la extracción sin control¹⁴. En toda la Amazonía, se perdieron 1.303 kilómetros cuadrados entre

¹³ Columbus (2004).

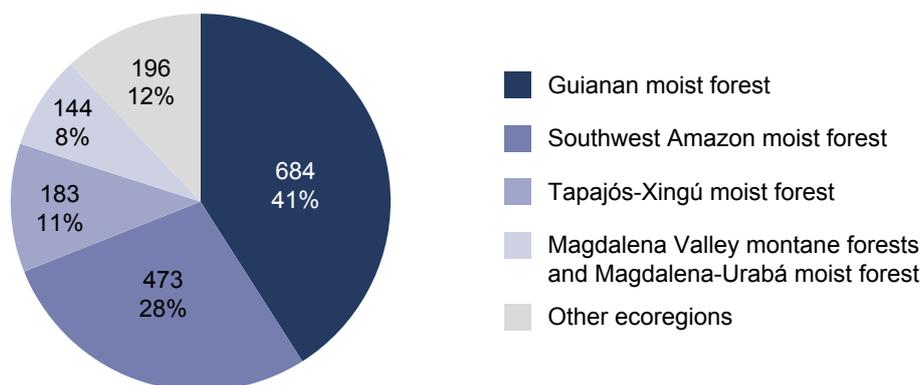
¹⁴ Torres (2015).

2007 y 2013 —un aumento de 245% en relación con el periodo antes de la crisis financiera global que contribuyó al aumento del precio del oro¹⁵—.

Imagen 3. Ecorregiones de la Amazonía con deforestamiento asociado a minería ilegal

Amazon ecoregions with the highest deforestation associated with gold mining activities, 2001-2013

Forest loss associated with gold mining (km²)



Fuente: Cannon, 2015: <https://news.mongabay.com/2015/01/amazon-gold-rush-destroying-huge-swaths-of-rainforest/>

Otro efecto de los delitos ambientales es la contaminación de ríos y de los sedimentos, con el fenómeno de «aguas muertas», donde se escasea la fauna y la flora, incluso el pescado. La actividad petrolera está contaminando de manera generalizada las cabeceras de los ríos del Amazonas y modificando la composición química de sus aguas con materiales como el plomo y la sal. En la Amazonía peruana próxima a la frontera con Ecuador, investigadores¹⁶ han cuantificado el impacto ambiental de los vertidos procedentes de la extracción petrolera en ríos de las cabeceras. Durante años, empresas petrolíferas en la región vertieron una media de 5 toneladas de plomo y 3,7 millones toneladas de sal en los ríos, aumentando la salinidad del Amazonas en un 30%¹⁷. Los resultados demuestran la presencia en el agua de los ríos de niveles muy elevados de cloruro, cromo, bario, plomo y cromo hexavalente, algunos de ellos compuestos muy contaminantes para el medio ambiente y peligrosos para la salud. Los científicos estiman que, en la actualidad, las aguas del río Amazonas superan en un 30% su concentración natural de sales¹⁸.

Además del impacto sobre la fauna silvestre, esta contaminación afecta directa e indirectamente a las comunidades indígenas que dependen de la caza y la pesca como fuente de proteína animal. Las toxinas afectan a toda la cadena alimentaria. De hecho, el estudio asocia esta contaminación crónica con los elevados niveles de plomo y cadmio (y sus compuestos neurotóxicos y cancerígenos) detectados en la sangre de los 45.000 habitantes de cinco etnias indígenas residentes en la misma zona de la Amazonía peruana.

Muchas de las mismas sustancias afectan igualmente al suelo amazónico. En el caso de la minería, el uso del mercurio y del cianuro, que son utilizados para separar el oro de otros minerales, borra las capas superiores del suelo que sustentan la vida vegetal. Después del dragado, la tierra contaminada con mercurio es devuelta al río o permanece en el bosque. Las pozas de

¹⁵ Cannon (2015).

¹⁶ Yusta-García *et al.* (2017).

¹⁷ UAB (2017).

¹⁸ Yusta-García *et al.* (2017).

mercurio y cianuro se van filtrando lentamente hacia las fuentes hídricas subterráneas, cuando no entran directamente en los ríos.

Relacionado con esos impactos, está el aumento de los riesgos de derrumbes sobre todo en las zonas escarpadas e inestables, y de inundaciones —fenómenos multiplicados por el cambio climático y que, a su vez, también contribuyen con la deforestación—. Un informe reciente del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Peruana (MAAP) revela una pérdida de 280 hectáreas, equivalentes a 385 campos de fútbol, producto de grandes derrumbes en tres áreas naturales protegidas de la Amazonía peruana¹⁹.

III. El crimen organizado en la Amazonía

La falta de un control adecuado y la incorrecta aplicación de la ley, combinadas con el difícil terreno, hace que el Amazonas sea especialmente vulnerable a la propagación del crimen organizado. Adoptamos la definición de las Naciones Unidas de los grupos criminales organizados: como un grupo de tres o más personas que no fue formado de manera aleatoria; que ha existido por un periodo de tiempo; que actúa de manera premeditada con el objetivo de cometer un delito punible y con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o material (UNODC, 2018). Tales grupos pueden ser locales, regionales, nacionales o transnacionales, y pueden también ser especializados en un tipo de delito u operar en diversos sectores y tipos de actividad.

Muchas veces las organizaciones están fuertemente articuladas con instituciones legales y la esfera pública, alimentando la corrupción y una amplia gama de delitos de cuello blanco. Algunas de sus principales actividades son el narcotráfico; el tráfico de armas, municiones y explosivos; el tráfico de seres humanos; la prostitución y la exploración sexual de menores; el trabajo esclavo; la extorsión y coerción; el lavado de dinero; los cibercrímenes; el contrabando de petróleo, y el comercio ilegal de madera y de especies en peligro de extinción.

La extensión del crimen organizado ayuda a explicar las tasas de violencia inusualmente altas en la región. América Latina es el hogar de solo el 8% de la población mundial, pero registra el 33% de sus homicidios. De hecho, solo cuatro países de la región —tres de los cuales son países de la Amazonía— (Brasil, Colombia, México y Venezuela) representan una cuarta parte de todos los asesinatos en el mundo. De los 20 países del mundo con las tasas más altas de homicidios, 17 son latinoamericanos, al igual que 43 de las 50 ciudades principales²⁰.

El desarrollo y la gobernabilidad democrática en América Latina se ven continuamente desafiados y afectados por el poder del crimen organizado. Este fenómeno contribuye para el aumento de la corrupción, de la desigualdad, de la violencia, y acaba limitando la actuación del Estado de derecho. Todas estas dinámicas se agudizan en la Amazonía por la débil presencia del Estado en gran parte de la región²¹.

El narcotráfico en la Amazonía

La producción de drogas ilícitas en la Amazonía se caracteriza por la constante promoción y por el desplazamiento en las diferentes áreas agrícolas. El número de campesinos e indígenas que se han incorporado a los cultivos ilícitos del narcotráfico ha aumentado, ya que la rentabilidad de los cultivos lícitos no supera a la de otros cultivos ilegales²². En el eslabón inicial de la cadena

¹⁹ Agostinho (2017).

²⁰ Muggah y Tobón (2018).

²¹ García (2013).

²² Cepal (2001).

productiva de las drogas, encontramos primeramente a las masas campesinas y mineras desplazadas de sus lugares de origen. Principalmente en Colombia, Perú y Bolivia —los principales productores de hoja de coca en el mundo, con una producción anual estimada de 550 toneladas de cocaína al año²³— la población indígena y campesina es utilizada por los narcotraficantes para el cultivo de hoja de coca, marihuana y amapola.

La producción de drogas ilícitas en la Amazonía es uno de los temas más atendidos dentro de la agenda de seguridad de los países que conforman la región. Esto ha propiciado un llamado de auxilio frente a la corresponsabilidad entre Estados productores y consumidores, resultando en la asistencia directa norteamericana. Sin embargo, las medidas que fueron adoptadas según la agenda estadounidense de la «guerra a las drogas» han priorizado las respuestas estatales militarizadas, como las aspersiones aéreas y fumigaciones de cultivos ilícitos²⁴. En general, el abordaje de «mano dura» tiende a aumentar los niveles de violencia en la región²⁵.

Muchos de los grandes grupos organizados que actúan en la Amazonía tienen su origen en el narcotráfico. En los últimos años, algunos de esos grupos han incluido a la Amazonía en sus esfuerzos de expansión territorial y de internacionalización. En Brasil, la Familia do Norte (FDN), que cuenta con cerca de 200.000 integrantes, es considerada la mayor organización criminal del Amazonas, y cada vez más disputa territorio con el Primeiro Comando da Capital (PCC), con base en São Paulo, y mantiene relaciones tensas con su aliado, el Comando Vermelho (CV), que tiene origen en Río de Janeiro. Los grupos se enfrentan directamente en grandes masacres y batallas entre facciones, sobre todo en el sistema penitenciario; en 2017, por ejemplo, 56 presos fueron asesinados en el Compaj (Manaus), la más grande penitenciaría del estado de Amazonas.

Como la extracción de oro, mismo al margen de la institucionalidad, es más rentable que el tráfico de drogas en la Amazonía, muchos grupos están migrando del narcotráfico a la minería ilegal. En 2015, el Ejército brasileño colaboró con fuerzas militares de Colombia en la Operación São Joaquim, que cerró las fronteras de la Amazonía para combatir a las facciones criminosas (PCC, FDN y otro grupo de Río de Janeiro, Amigos dos Amigos —ADA—) que mantienen vínculos con las FARC y otros grupos armados en Colombia. De acuerdo con militares brasileños, tales grupos están ampliando su rol en la minería ilegal, y 98% de esa actividad en la región está ubicada en territorio brasileño²⁶.

Sin embargo, el crimen organizado en la Amazonía se manifiesta a través de una amplia gama de escalas y estructuras organizacionales. En muchas áreas, la minería ilegal es controlada por organizaciones de pequeño y mediano porte que se especializan más estrechamente en ese tipo de extracción y las actividades que tienden a acompañarla, tales como la extorsión y la prostitución. Eso abarca a los que extraen minerales de forma artesanal, sin usar maquinaria o usando tecnologías precarias y, por extraer sin estar bajo la reglamentación del Estado, en condición de informalidad. De los pequeños a los grandes, todas las categorías están involucradas en la extracción de minerales en zonas prohibidas —no solamente de oro, sino que de otros minerales que son abundantes en la región, tales como el cobre, estaño, wolframio, etc.—.

Así como el narcotráfico, el tráfico de armas produce retos para la seguridad en la región. En Brasil y Colombia, por ejemplo, más del 90% de los homicidios resultan de heridas de armas de fuego²⁷. Generalmente, las armas tienen como destino los grupos ilegales que detienen el monopolio de la fuerza en la región. En toda la región, las armas pequeñas están estrechamente relacionadas con el tráfico de drogas, como una de sus principales monedas y como un elemento

²³ *Idem*.

²⁴ Vargas (2013).

²⁵ Muggah, Garzón y Suárez (2018).

²⁶ Oliveira (2015).

²⁷ Muggah (2016).

crítico para el cultivo y la distribución de las drogas ilícitas²⁸. En los sitios que concentran la minería ilegal, las organizaciones criminales frecuentemente establecen grupos armados que alimentan el contrabando de armas y que se convierten en agentes de violencia, violando los derechos humanos y compitiendo con el Estado por el monopolio del uso de la fuerza.

El tráfico humano

El tráfico de personas constituye una actividad ilegal que, además de ser complementaria al narcotráfico, se articula también con actividades legales. Un ejemplo claro se refiere a la forma de producción de la Amazonía, específicamente con la producción extractiva de materias primas, donde los números de trabajadores en situaciones de tráfico son elevados.

En algunos puntos de la región, tales como la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia, el tráfico humano se aprovecha de las fronteras prácticamente abiertas, del monitoreo inadecuado y de la falta de intercambio de información entre los países de la región. De acuerdo con la Secretaría de Justicia, Derechos Humanos y Ciudadanía (Sejusc) de Brasil, la Amazonía se ha convertido en ruta para el tráfico de humanos —sobre todo de mujeres— para destinos tales como Surinam, Venezuela, Suiza y España²⁹.

IV. La minería ilegal en la Amazonía

Aunque la minería en la Amazonía no cause la deforestación en la misma escala que la tala y la agricultura en masa, esa actividad tiene una amplia gama de efectos sobre el medio ambiente y las comunidades, sobre todo aquellas ubicadas en las cercanías del sitio de minería y aguas abajo de las operaciones extractivas. La Amazonía tiene un gran potencial para los activos minerales, a saber, cobre, estaño, níquel, bauxita, manganeso, mineral de hierro y oro. Como resultado, los Gobiernos están ofreciendo incentivos fiscales para proyectos en gran escala, con el fin de impulsar el desarrollo.

La extracción del oro varía de acuerdo con el precio del metal, que tiende a aumentar cuando hay mayor inestabilidad en los mercados globales. Entre 2000 y 2010, el precio aumentó más del 300%. La tendencia a largo plazo ha sido de aumento, lo que amplía la demanda. Cuando el precio del oro está alto, los mineros que normalmente no extraerían oro en áreas marginales pueden hacerlo sin pérdidas económicas. En la Amazonía, esto resulta en una minería artesanal rampante, sobre todo en la base de los Andes, donde millones de años de escurrimiento sedimentario han acumulado pequeños depósitos de oro. Al mismo tiempo, debido a la naturaleza sinuosa de los ríos del Amazonas, el oro se encuentra tanto en los canales fluviales como en las llanuras aluviales donde alguna vez corrieron los ríos. El gráfico 2 ilustra los principales puntos de minería ilegal en la Amazonía.

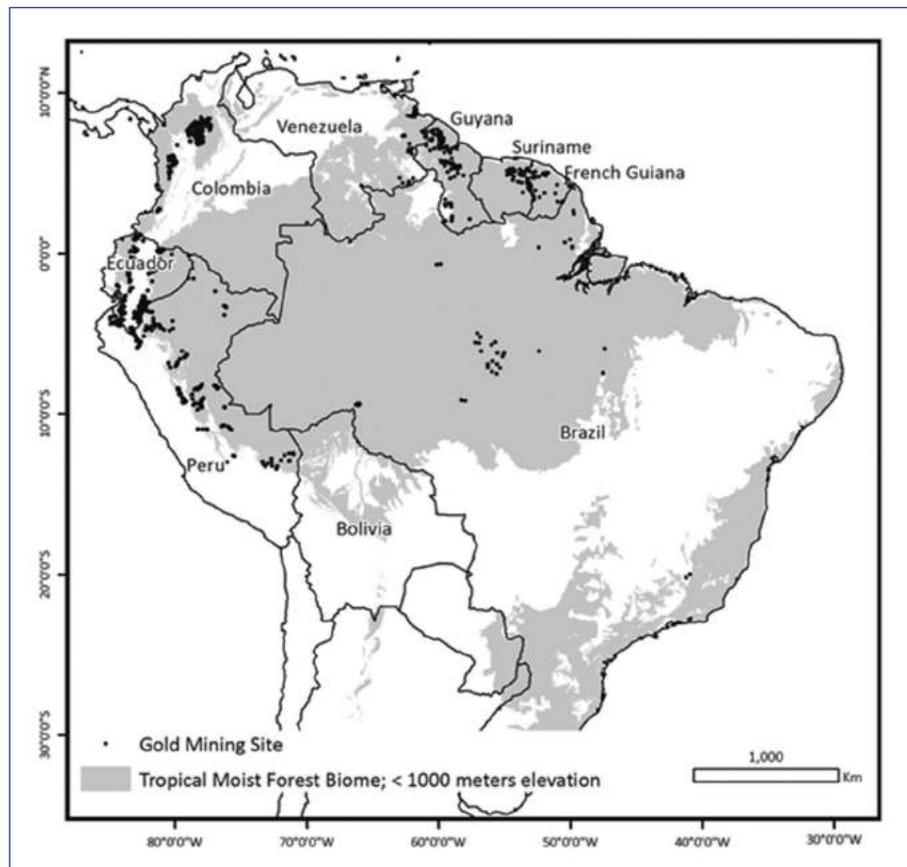
En algunos países la producción ilegal de oro es más importante para los grupos criminales que el tráfico de drogas: en Perú y Colombia —los mayores productores de cocaína en el mundo— el valor de las exportaciones de oro de origen ilícito supera el valor de las exportaciones de cocaína. La minería ilegal ha sido la forma más fácil y redituable de lavar el dinero proveniente del narcotráfico en Colombia.

En la primera década del siglo XXI, dos tendencias se intersectaron: por un lado, el alza del precio del oro, que aumentó enormemente los beneficios económicos de la explotación de este metal; por el otro, la «Guerra contra las Drogas» librada por los Estados Unidos, principalmente

²⁸ Stohl y Tuttle (2008).

²⁹ Souza (2016).

Imagen 4. Epicentros de minería de oro activos y potenciales en la Amazonía



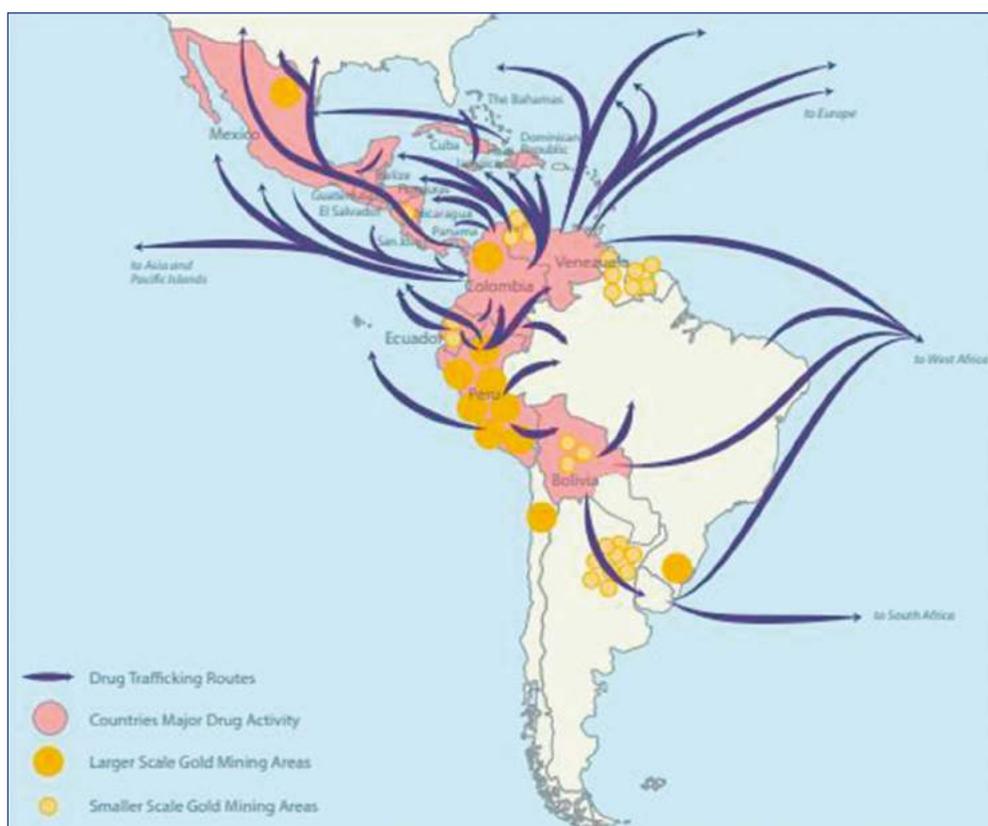
Fuente: Alvarez-Berrios y Aide, 2015: <http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/10/1/014006>.

en Colombia y México (el llamado «Plan Colombia» y la «Iniciativa Mérida»), redujo bruscamente la rentabilidad del tráfico de drogas desde Latinoamérica hacia los Estados Unidos. Como resultado, las bandas criminales que controlan el narcotráfico vieron un gran incentivo a volcarse hacia la explotación ilegal de oro, y la fragmentación de la minería artesanal de oro en América Latina no hizo más que facilitar su entrada. Estos grupos entendieron rápidamente que tomar el control de grandes porciones de tierra alejadas de la mirada del Gobierno y dominar las empresas que tenían sus minas en esas tierras les permitirían generar grandes márgenes de ganancia con riesgos mucho menores. A pesar de que el precio mundial del oro ha venido bajando en los últimos años, las organizaciones criminales siguen impulsando la expansión de la extracción ilegal de oro. La región se caracteriza actualmente por los altos porcentajes de oro extraído de manera ilegal; alrededor del 28% del oro extraído en Perú, del 30% en Bolivia, del 77% en Ecuador, del 80% en Colombia, y de entre el 80% y el 90% en Venezuela es producido ilegalmente. La minería ilegal de oro emplea a cientos de miles de trabajadores en toda Latinoamérica, muchos de los cuales son extremadamente vulnerables a la explotación laboral y a la trata de personas.

Más allá del factor financiero, la producción de oro es una de las actividades más destructivas en el mundo, y la minería ilegal, en particular, puede traer consecuencias catastróficas para el medio ambiente, ya que ignora las restricciones y requisitos legales, desplaza a las comunidades, contamina las fuentes de agua potable, destruye el medio ambiente, y contamina el agua y la tierra con mercurio y cianuro, poniendo en peligro la salud de las personas y los ecosistemas: Colombia posee la mayor población de personas desplazadas en el mundo, de la cual el 87% viene de zonas en donde hay una activa presencia de minería ilegal. A través de la

minería artesanal de oro se vierten más de 30 toneladas de mercurio en ríos y lagos en la cuenca amazónica cada año, envenenando peces y causando daños cerebrales a personas que residen también hasta 400 km río abajo. Se ha observado una deforestación masiva en la cuenca amazónica. El análisis revela muchos casos de explotación laboral, sexual, y de menores. En el sur de Bolívar, Colombia, se emplearon 1.500 trabajadores en una mina, propiedad de la esposa de un exlíder de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), a los cuales no les era permitido dejar la zona sin ser escoltados por el grupo narco-paramilitar que operaba en la zona.

Imagen 5. Principales rutas del narcotráfico y principales áreas de explotación de oro en América Latina y el Caribe



Fuente: Global Initiative against Transnational Organized Crime.

Los impactos³⁰

La minería puede afectar el drenaje de agua de la zona, contaminar el agua con escorrentía de la mina y amenazar a las comunidades locales, incluidos los pueblos indígenas, al afectar la calidad del suministro de alimentos. Otros efectos incluyen:

Deforestación: Álvarez-Berrios y su coautor, T. Mitchell Aide, descubrieron que entre 2001 y 2013, alrededor de 1.680 kilómetros cuadrados (650 millas cuadradas) de bosques fueron destruidos en relación con la extracción de oro en 1.600 sitios mineros individuales en toda

³⁰ WWF.

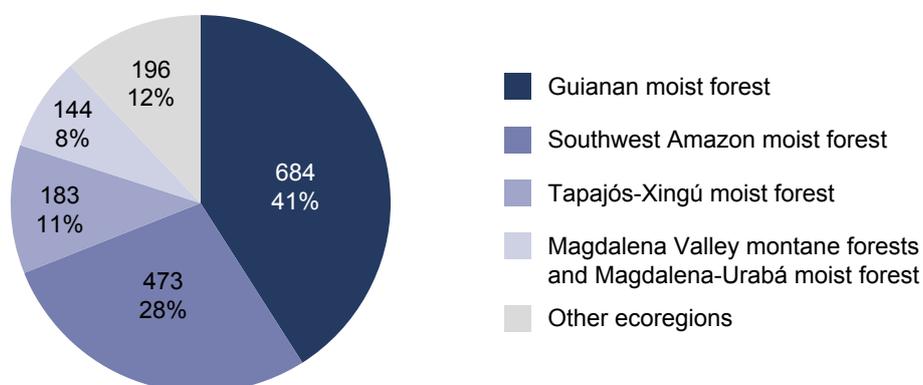
Sudamérica. La distribución de la deforestación, sin embargo, fue todo menos par. Los investigadores encontraron que más del 90% de la pérdida de bosques ocurrió en cuatro «zonas críticas», incluidos los depósitos de «algunos de los bosques primarios más remotos y mejor conservados en la zona tropical de América del Sur», afirman los autores en su artículo.

Los datos de 2013 indican que las regiones con mayor deforestación debido a la minería del oro en la Amazonía son la floresta húmeda de la Guyana, el sudoeste de la Amazonía, el Tapajós-Xingú, y el Valle Magdalena (montana y boques Urabá³¹).

Imagen 6. **Ecorregiones amazónicas con mayor deforestación debido a la minería del oro**

Amazon ecoregions with the highest deforestation associated with gold mining activities, 2001-2013

Forest loss associated with gold mining (km²)



En la provincia minera de Carajas, Brasil, tal vez la mayor reserva de cobre del mundo (mineral de hierro, manganeso y oro ya se encuentran allí), la madera del bosque circundante se corta para carbón vegetal para alimentar plantas de arrabio, lo que provoca una deforestación anual de 6.100 km².

Contaminación: un contaminante conocido utilizado en la extracción de oro es el mercurio. En las proximidades de los sitios de extracción de oro, se puede encontrar en altas concentraciones en los peces, afectando a las poblaciones locales. El mercurio también termina en la atmósfera, de donde regresa a los bosques. Por ejemplo, el 90% de los peces capturados por aldeanos rurales al sur de las zonas mineras de oro del río Tapajós en Brasil estaban contaminados con metilmercurio². Este químico es peligroso para el sistema nervioso y los fetos.

Invasión en tierras indígenas: cuando la minería se lleva a cabo en áreas que son colonizadas por pueblos indígenas, pueden ocurrir enfrentamientos. Se ha informado de que hay medio millón de buscadores de oro (*garimpeiros* en portugués) que trabajan en toda la cuenca del Amazonas en operaciones pequeñas. En el estado brasileño de Roraima, se han desatado conflictos entre los indígenas yanomami y los *garimpeiros*, que invaden sus tierras, contaminando los ríos y transmitiendo enfermedades mortales, como la malaria³². En algunas ocasiones, el Gobierno tuvo que intervenir militarmente para desalojar a los mineros de las tierras indígenas³³.

³¹ Cannon (2015).

³² Survival.

³³ EB (2018).

V. Los impactos socioeconómicos de los delitos ambientales

Los delitos y crímenes en la Amazonía comprometen la seguridad de los Estados como un todo, contribuyendo a la desestabilización y al aumento de la violencia en las comunidades locales. Las violaciones a los derechos humanos, los impactos económicos a largo plazo, y los daños a la biodiversidad y al clima global son multiplicados por la presencia del crimen organizado.

Las acciones del Estado (o, más frecuentemente, la ausencia del mismo) y una cultura de corrupción institucionalizada también contribuyen a la expansión de los crímenes ambientales y la perpetuación de la exclusión social en la región amazónica. Por ejemplo, los objetivos contradictorios entre las actividades del agronegocio y de la minería en Brasil, Perú y Colombia a menudo conducen a la violencia. Sin embargo, las actividades consideradas legales, como la agricultura extensiva o la minería, también generan impactos sociales, sobre todo los conflictos socioambientales.

En este contexto, clasificamos los impactos sociales más expresivos en la región, separados por las categorías de condiciones laborales, violencia, desplazamiento forzado, y otras condiciones socioeconómicas (tabla 1). Para cada categoría, proponemos tres subcategorías que corresponden a los impactos más expresivos en las comunidades de la cuenca amazónica.

Tabla 1. **Impactos socioeconómicos del crimen organizado en la Amazonía**

Impactos Sociales	
Condiciones laborales	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo precario • Esclavitud • Trabajo infantil
Violencia	<ul style="list-style-type: none"> • Homicidios/disputas territoriales • Violencia sexual • Violencia estatal
Desplazamiento forzado	<ul style="list-style-type: none"> • Instigación • Migraciones provocadas por D.E. • Desastres ambientales/cambio climático
Condiciones socioeconómicas	<ul style="list-style-type: none"> • Prostitución • Tráfico humano • Bolsos de pobreza/desigualdad

Condiciones Laborales

La esclavitud moderna se refiere al trabajo forzoso: situaciones de explotación que una persona no puede rechazar o dejar a causa de amenazas, violencia, coerción, fraude y/o abuso de poder³⁴. Se estima que 40,3 millones de personas fueron víctimas de trabajo esclavo en el mundo en 2016. De ese total, cerca de 1,3 de cada 1.000 personas ya fue víctima de trabajo forzado/esclavo en los países de la América³⁵.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores migrantes y los pueblos indígenas son los más vulnerables al trabajo forzado. Según el informe de Trabajos Forzados de 2017, los trabajadores liberados son, en su mayoría, migrantes internos o externos, que dejaron sus hogares hacia una región de expansión

³⁴ Ilo.

³⁵ Ilo (2017).

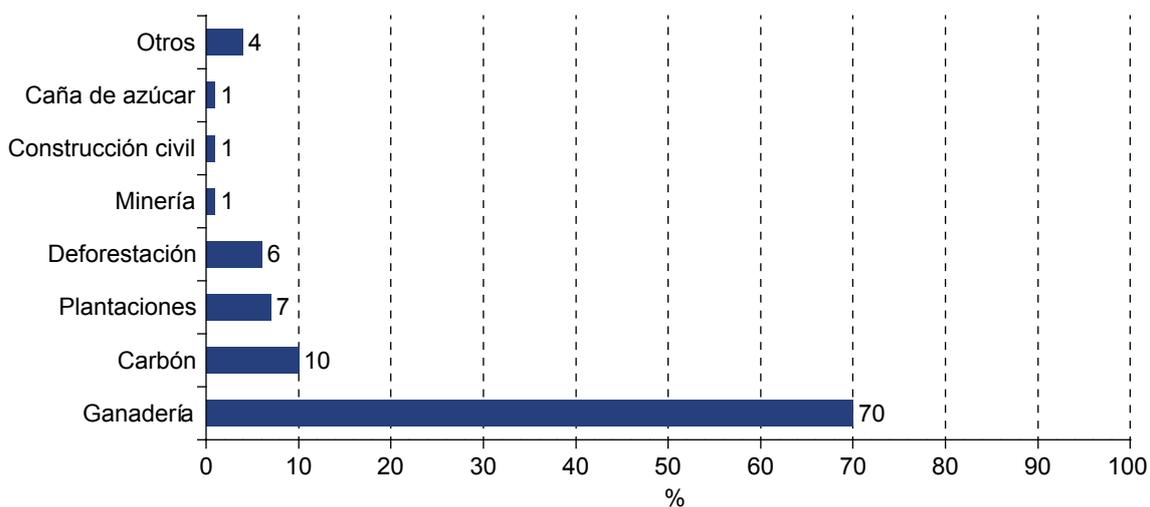
agropecuaria o para grandes centros urbanos en busca de nuevas oportunidades o atraídos por falsas promesas.

El modelo de desarrollo de la Amazonía se basa principalmente en la degradación ambiental intensiva, reforzando la exclusión social, la miseria y la deforestación. Gracias a factores tales como el aislamiento geográfico, la escasa oferta de trabajo, los altos índices de pobreza y la ausencia de protección del Estado, las poblaciones de la región son altamente vulnerables a ser sometidas a condiciones precarias de trabajo y explotación laboral.

En esta perspectiva es posible establecer una estrecha relación entre las condiciones precarias de trabajo, crimen organizado y delitos ambientales, sobre todo en actividades de deforestación. Los lugares de la Amazonía que han sufrido más deforestación presentan los mayores índices de trabajo esclavo y condiciones precarias para el trabajador³⁶. En los estados brasileños de Pará, Mato Grosso y Maranhão, por ejemplo, muchos trabajadores son obligados a dormir en alojamientos precarios y superpoblados, además, son obligados a comprar equipos de trabajo y a menudo no pueden dejar el empleo porque acumularon deudas con el patrón³⁷.

En Brasil, cerca de 50.000 trabajadores fueron rescatados de trabajos con condiciones cercanas a la esclavitud entre 2003 y 2017³⁸, la mayor parte en la región amazónica. Según datos divulgados por la OIT, de 1995 a 2015, los diez municipios con mayor número de casos de trabajo esclavo del país se sitúan en la Amazonía Legal. El trabajo esclavo está fuertemente vinculado a la minería ilegal, al lavado de dinero y a la corrupción. En noviembre 2017, la Policía Federal de Brasil realizó una operación para combatir la minería ilegal en el estado de Amapá. En el distrito de Lourenço, empresarios de Río de Janeiro y de São Paulo se habían apoderado de una cooperativa de *garimpeiros* (mineros ilegales) y usaban a los trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud. Las investigaciones demostraron que las actividades tuvieron también la participación de políticos locales³⁹.

Imagen 7. **Distribución de casos de trabajo esclavo en la Amazonía brasileña por actividades económicas (2003-2014)**



Fuente: *Amazônia: Trabalho Escravo e Dinâmicas correlatas*. <http://reporterbrasil.org.br/biblioteca/amazonia-trabalho-escravo-dinamicas-correlatas/>.

³⁶ Thenório (2009).

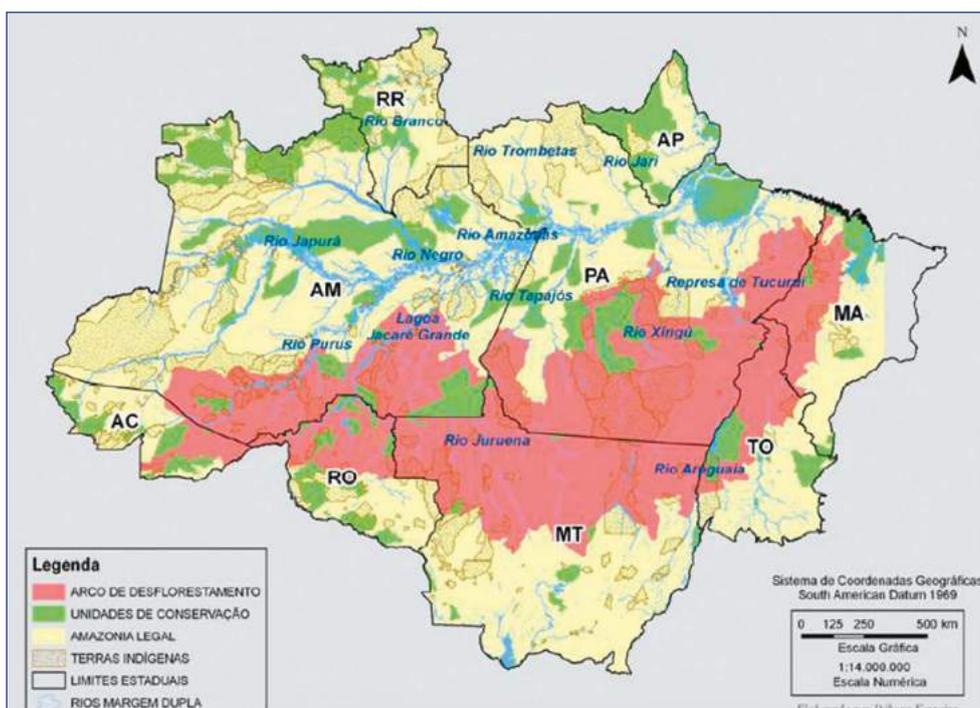
³⁷ *Idem*.

³⁸ Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil.

³⁹ Andreolla (2017).

En el siguiente gráfico, entre las actividades enumeradas por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), quienes más hacen uso de mano de obra esclava se destacan en la lista la ganadería y la producción de carbón —dos sectores que están entre los mayores responsables de la deforestación en el país—. Sin embargo, la reciente expansión de la minería ilegal por toda la cuenca amazónica también puede ser considerada responsable por el aumento de las condiciones laborales precarias y coercitivas en la región.

Imagen 8. Arco de la deforestación de la Amazonía brasileña



Fuente: IBAMA, 2007.

El llamado «arco de la Deforestación» de la Amazonía brasileña —cerca de 500.000 km² de tierras que se extienden desde el sudeste de Pará hacia el oeste, pasando por Mato Grosso, Rondônia y Acre— concentra también las tasas más altas de trabajo esclavo del país. La ciudad de São Félix do Xingú, en Pará, ya tuvo cerca del 20,8% de su territorio deforestado en función de la expansión del agronegocio y de la pecuaria, una de las ciudades de la región amazónica más afectadas por la deforestación y las actividades ilegales⁴⁰. Entre 2003 y 2014, esa misma ciudad también presentó el mayor número de casos de trabajo esclavo en Brasil; según el Ministerio del Trabajo, 822 de personas fueron liberadas de condiciones inhumanas de trabajo⁴¹.

En Perú, según un informe de la Fundación Walk Free, en 2016, cerca de 200.000 peruanos fallecieron a causa de trabajos forzados en el país, dejando a Perú con la tercera mayor tasa de ese tipo de trabajo en América Latina, después de México y Colombia. De acuerdo con datos de la OIT y del Gobierno federal, las actividades con la mayor incidencia de trabajo forzado en el país son actividades madereras en la Amazonía peruana, minería ilegal y trabajo doméstico.

En Perú existen dos formas principales de trabajo forzado en las actividades madereras en la región amazónica, según el Ministerio de Trabajo y la OIT. La primera modalidad consiste en la

⁴⁰ Repórter Brasil (2015).

⁴¹ *Idem*.

relación en que las comunidades indígenas son contratadas para suministrar madera de sus propias tierras. En cambio, los indígenas reciben dinero, comida u otros bienes que se adelantan a ellos bajo la condición de que los miembros de la comunidad, que conocen el área, entreguen madera⁴².

Los lugares en la Amazonía peruana donde ocurren los mayores flujos de extracción ilegal de madera, como Ucayali, Madre de Dios y Loreta, son también las áreas que tienen los mayores índices de trabajo esclavo. El aumento del precio global de las maderas de lujo ha provocado una intensificación de la explotación de la madera amazónica. Las actividades madereras alcanzaron áreas previamente protegidas en la región y han establecido dinámicas de trabajo forzado para mantener un suministro de mano de obra para esas áreas remotas.

En la segunda modalidad de trabajo forzado en Perú, indígenas y otros trabajadores (generalmente mestizos) son contratados para trabajar en campamentos madereros. Ambas formas usan el «engaño» para aprisionar a los trabajadores en un ciclo de deuda y servidumbre que a menudo se pasa de una generación a otra. Las condiciones laborales son precarias, pues reciben salarios muy bajos (imposibilitando el pago de la deuda), muchas veces no poseen contratos laborales, no tienen equipo de seguridad para acompañar la extracción de la madera, ni primeros auxilios o medios para evacuar a alguien a un hospital ante un accidente grave.

En la minería, las ocurrencias de trabajo forzado se encuentran principalmente en las áreas en que la actividad se hace de manera ilegal y en pequeña escala, como ocurre en Madre Dios. En esta región, existe un sistema de trabajo conocido como «habilitación-enganche», a través del cual el trabajador no tiene vínculos directos con la empresa que financia la actividad, sino que trata con varios intermediarios —una situación que lleva al trabajo forzado⁴³—.

En Bolivia también hay elevados índices de trabajo forzado en la región amazónica, principalmente en los locales donde ocurre la cosecha de la castaña (la llamada nuez del Brasil). De acuerdo con un estudio realizado en 2005 por el Gobierno boliviano y la OIT, cerca de 31.000 personas migran a la Amazonía boliviana cada año para participar de la cosecha. Aunque la mayoría de los trabajadores sean liberados después del periodo de la cosecha, en muchos casos la migración conduce a la acumulación de deuda por el trabajador, que no logra sanar hasta el final de la temporada. Otra consecuencia son los casos en que los trabajadores no reciben los pagos a tiempo y, mismo así, son multados si abandonan el trabajo sin la autorización del administrador. Algunos de los contratos que estos trabajadores han firmado en los últimos años se asemejan a contratos redactados hace cien años⁴⁴.

Muchos trabajadores agrícolas, principalmente indígenas, se encuentran en una situación de servidumbre por deudas, casi siempre la consecuencia de los anticipos salariales concedidos por empresas contratistas privadas de mano de obra. El grado de sumisión al trabajo forzado abusivo de los indígenas de la Amazonía depende claramente de la invasión por las empresas en sus territorios protegidos. La falta de fiscalización, la corrupción y la estructura en la que opera el crimen organizado influye en esta dinámica.

Aumento de la violencia

a) Disputas territoriales

La deforestación provocada por las actividades ilegales del agronegocio y de la extracción ilegal de madera también contribuye para el aumento de la violencia en la región, provocando

⁴² Sharma (2006).

⁴³ Thomann (2011).

⁴⁴ Sharma (2006).

disputas por la tierra, invasiones de tierras indígenas y unidades de conservación. Los enfrentamientos involucran diferentes grupos, tales como latifundistas, activistas, indígenas y quilombolas.

El crimen organizado del agronegocio tiene diferentes maneras de actuación, que van desde la falsificación de licencias de extracción de madera a la extracción fuera de concesiones e invasión de sitios del Gobierno para obtener permisos electrónicos y a la invasión de tierras preservadas y reservas indígenas. A menudo los grupos criminales recurren a nuevas tecnologías para cometer estos delitos. En la Amazonía brasileña, por ejemplo, en 2008, *hackers* que trabajaban para grupos madereros ilegales en el estado de Pará obtuvieron acceso a licencias de transporte y extracción de madera, permitiendo el robo de cerca de 1,7 millones de metros cúbicos de bosque⁴⁵.

El año 2017 fue considerado el más peligroso para los defensores del medio ambiente. Según el último informe de Global Witness, se registraron más de 207 asesinatos de activistas de la tierra y del medio ambiente y cerca del 60% de ellos ocurrieron en América Latina. En Brasil, 57 defensores (80% de los cuales en la Amazonía) resultaron muertos en 2017; en Colombia, fueron asesinados 24 en el mismo periodo. Líderes indígenas y comunitarios son atacados por defender la tierra y el medio ambiente. En septiembre de 2017, por ejemplo, seis agricultores peruanos fueron emboscados y asesinados por hombres enmascarados y armados. Estos ataques y, más ampliamente, las amenazas a los defensores, están asociados a actividades tales como el agronegocio, la minería, la caza ilegal y la explotación forestal⁴⁶. El informe defiende que leyes ambientalmente regresivas, que permitan exploración de recursos en grande escala, contribuyen a la intensificación de los conflictos y ataques.

La existencia de una cultura de impunidad con los grandes terratenientes, reformas legislativas y presupuestarias a favor de las grandes empresas y el aumento de la presencia del crimen organizado, practicando crímenes ambientales a gran escala, son una de las principales causas de los altos índices de violencia en la Amazonía⁴⁷.

En 2017, en las áreas correspondientes a la Amazonía Legal todas las demás formas de violencia contra la persona crecieron en relación al año 2016. El informe de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), mostró que los intentos de asesinato pasaron de 74 a 120; las amenazas de muerte aumentaron de 200 a 226. El número de personas torturadas pasó de 1 a 6. Y el de presos fue de 228 a 263. Pero uno de los índices más alarmantes del reflejo del aumento de la violencia corresponde al número de masacres ocurridas: 5 masacres con 31 víctimas fueron registradas el mismo año⁴⁸.

Los índices de violencia estatal también son altos en la Amazonía. De acuerdo con los informes de Global Witness y de la CPT, en Brasil las fuerzas de seguridad del ejército y la policía estaban ligadas a cerca de 25% de los asesinatos a activistas en 2017. Uno de los mayores ataques de las fuerzas estatales contra activistas resultó en la matanza de la región del Pau D'Arco, en Pará, donde un grupo de 19 policías mató a 9 activistas del medio ambiente en una operación de reintegración de posesión⁴⁹.

La situación se agrava más en Brasil a medida en que el Gobierno aumenta la disparidad de las relaciones de poder entre hacendados y defensores de la tierra, a través de reformas en la legislación del medio ambiente. Tales medidas debilitan a las instituciones destinadas a proteger los

⁴⁵ Nellemann (2012).

⁴⁶ Global Witness (2018).

⁴⁷ Abdenur (2018).

⁴⁸ *Idem*.

⁴⁹ O Globo (2018).

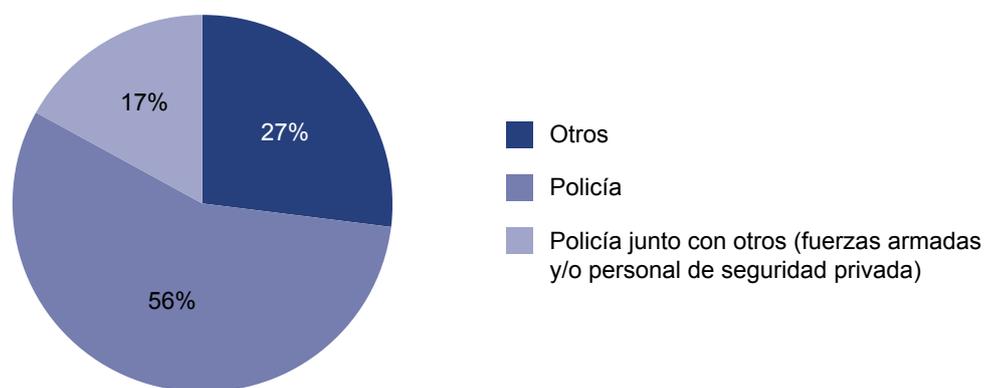
derechos de la tierra y los pueblos indígenas, reduciendo los presupuestos y facilitando la expansión e intensificación de las actividades de las grandes empresas en áreas rurales⁵⁰.

En Perú —el cuarto lugar más mortal del mundo para los defensores del medio ambiente y de la tierra— los índices de violencia en la región amazónica también son alarmantes⁵¹. La mayoría de las muertes registradas por el informe de 2014 de Global Witness tuvieron relaciones con los conflictos relativos a la expansión de la minería y la deforestación ilegal en la Amazonía. En 2016, el Organismo de Supervisión Forestal (OSINFOR) reportó que el 78% de la madera inspeccionada en la Amazonía peruana entre 2009 y 2016 provenía de fuentes ilegales. Además, la extracción ilegal de madera está vinculada a diversos crímenes, tales como explotación de mano de obra, invasión de tierras, evasión fiscal y asesinato de defensores del medio ambiente. La extensa falsificación de documentos para desmatar en áreas no autorizadas, sumada a la corrupción e impunidad por parte del Gobierno peruano, también contribuye a este panorama alarmante.

El agronegocio y la tala ilegal en Perú están asociados a altos índices de violencia contra la población local, trabajo forzado, prostitución, tráfico humano y conflictos sociales violentos. En 2014, el asesinato del activista peruano Edwin Chota y tres miembros de la comunidad asháninca por presuntos madereros ilegales atrajo la atención mundial sobre estos problemas de gobernanza en el país. Sin embargo, la violencia ha continuado. En 2017, 60 hombres armados ingresaron en una comunidad asháninca en Satipo, una región de Junín, y expulsaron a 25 familias, haciendo falsos reclamos sobre su tierra.

En el siguiente gráfico se perciben los altos índices de la violencia por parte del Gobierno peruano, fruto de una falta de legislación y fiscalización para abordar los problemas ambientales de la región:

Imagen 9. **Presuntos autores de asesinatos conocidos de defensores ambientales y de la tierra en Perú entre 2002 y la actualidad**



Fuente: *Peru's Deadly Environment: The Rise in Killings of Environment and Land Defenders*. Global Witness, 2014.

Muchos de los asesinatos de defensores ambientales y de la tierra en Perú, sobre todo en la región amazónica, se atribuyen a conflictos entre comunidades locales, crimen organizado y actividades extractivas ilegales. Sin embargo, ciertas medidas legales también han debilitado las protecciones para los activistas y contribuido al aumento de la violencia estatal y social en la Amazonía. Por ejemplo, la ley 30.230 amplía los derechos de uso de la tierra de los

⁵⁰ Global Witness (2018).

⁵¹ Global Witness (2014).

inversores, para la expansión de la agricultura a gran escala, la minería, la tala y proyectos de infraestructuras⁵².

En Colombia, la violencia contra los líderes ambientales y sociales aumentó tras la firma del acuerdo entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Uno de los objetivos del acuerdo era que el Estado hiciera presencia positiva en los espacios históricamente afectados por el conflicto. Sin embargo, ese objetivo no fue alcanzado y, con la desmovilización de las FARC como grupo armado, la ausencia del Gobierno en ciertas partes del territorio acabó produciendo un vacío de poder en los lugares anteriormente ocupados por la guerrilla. De 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, a 2018, un total de 311 activistas, líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia⁵³. El informe de Global Witness cita a Colombia como el tercer país más peligroso en el mundo para los defensores del medio ambiente⁵⁴.

En la región amazónica, por ejemplo, surgieron nuevas milicias que compiten con grupos paramilitares para controlar la tierra que pertenece a las comunidades indígenas y otras comunidades rurales que abandonaron el territorio durante la guerra y tratan de regresar tras la firma del acuerdo. La combinación del crimen organizado en la región amazónica con la corrupción estatal y la impunidad del sistema judicial conduce a la intensificación de los conflictos por la tierra y a la destrucción ambiental.

Las principales consecuencias de las acciones del crimen organizado en la Amazonía colombiana son, por un lado, la degradación ambiental, reflejada en los altos índices de áreas deforestadas que, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la región concentró (65,5% de las áreas deforestadas del país); por otro lado, aumentaron también los índices de violencia de la población local, desplazamiento forzado, desaparición forzada, tráfico humano y confinamiento.

En la región amazónica colombiana confluyen todos los problemas ambientales del país: deforestación, extensión de la frontera agropecuaria y un aumento de los cultivos ilícitos, además de la minería ilegal. Con la presencia de todos estos actores —tanto legales como ilegales— sobre todo en áreas protegidas, uno de los principales factores por tras de los conflictos sociales es el acaparamiento de tierras, a través del cual los territorios son dedicados a actividades ilegales y a la espera de una futura valoración comercial⁵⁵.

Los conflictos por la tierra en la región amazónica se expresan por la lucha contra las más variadas formas de delitos y abusos. Hay muchos relatos contra funcionarios públicos que se alían con los criminales para amenazar a los campesinos y obligarlos a vender a precios muy por debajo del valor real. Existen también informes de explotación laboral de las comunidades locales y el problema de confinamiento por el que la población local queda sometida debido a las actividades ilegales presentes en la región. Con la debilidad del sistema judicial, la impunidad exacerba todos esos problemas y la violencia en general; los perpetradores de los ataques a los defensores del medio ambiente quedan libres y raramente son procesados. Las cifras indican una tasa de impunidad del 92% de los crímenes cometidos contra activistas del medio ambiente en Colombia⁵⁶.

La falta de institucionalidad de la distribución de la tierra en la Amazonía colombiana, los altos índices de pobreza y falta de inversión del Gobierno acaban limitando a las comunidades locales a someterse a actividades de deforestación, minería e incluso cultivos ilícitos. En este sentido, las comunidades se sitúan forzadas a manifestarse, convirtiéndose en defensoras en la línea de frente de esa lucha.

⁵² Ley 30.230 (2014).

⁵³ The Guardian.

⁵⁴ Global Witness (2018).

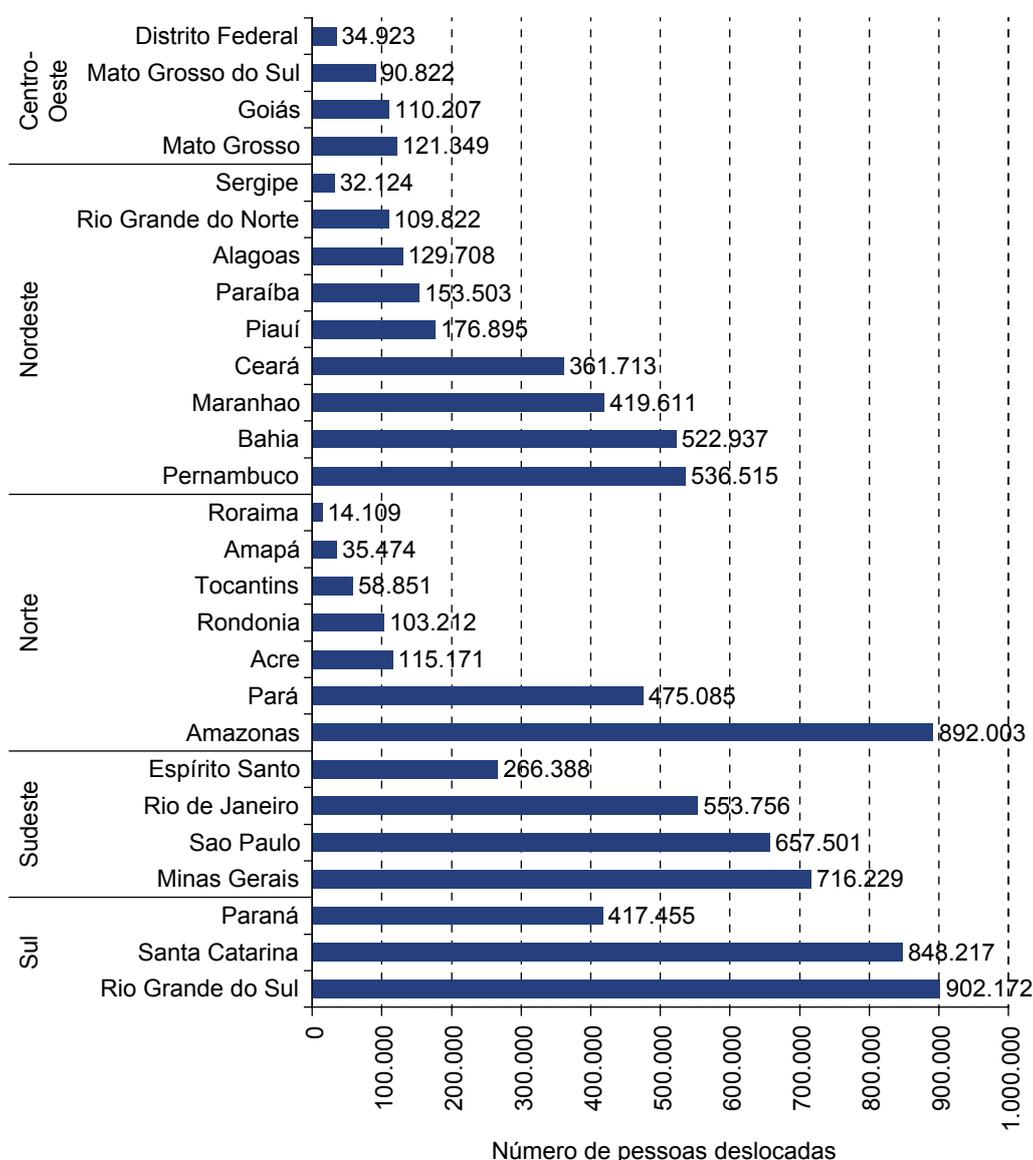
⁵⁵ Mongabay (2018).

⁵⁶ Monsalve (2018).

Desplazamiento

El nexo entre el crimen organizado y los delitos ambientales también contribuye al desplazamiento forzado de poblaciones de la Amazonía. En general, la escasez de alimentos, la deforestación y el avance de las ciudades sobre los bosques son algunos factores que motivaron a pueblos tradicionales a migrar a áreas urbanas. El fenómeno es exacerbado por los efectos del cambio climático, que también contribuye a la degradación de los sistemas de agua dulce, la pérdida de suelos de valor ecológico y agrícola, el aumento de la erosión, la disminución de los rendimientos agrícolas, el aumento de la infestación de insectos y la propagación de enfermedades infecciosas⁵⁷ —todos factores que aumentan los conflictos sociales—.

Imagen 10. **Distribución geográfica del desplazamiento forzado en Brasil**



Fuente: Instituto Igarapé.

⁵⁷ WWF.

En ese contexto, los grupos armados ilegales tienden a producir *hotspots* de desplazamiento. En Colombia, las FARC estuvieron involucradas con el crimen organizado y los delitos ambientales en por lo menos 12 parques naturales, sobre todo a través de la compañía Acacio Medina, en Guainía, donde la guerrilla recogía en un mes 1.700 millones de pesos por sus *inversiones* en minería de oro y coltan, según cifras del Ministerio de Defensa. De hecho, hay miles de procesos contra las FARC por el daño ambiental. Además de la extorsión de las *vacunas* de toda la cadena de extracción, las FARC prestaban dinero a los mineros, con intereses de usura, para conseguir las retroexcavadoras⁵⁸. Esas dinámicas contribuyeron a niveles extremadamente elevados de desplazamiento forzado.

Sin embargo, en provincias amazónicas tales como Caquetá, Guaviare y Putumayo, aunque parte del desplazamiento forzado haya sido producto del conflicto con la guerrilla, investigadores han concluido que fenómenos subyacentes, tales como la violencia y las invasiones, continúan produciendo flujos migratorios internos y transnacionales mismo después de la firma del acuerdo con las FARC.

Mismo en áreas de la Amazonía donde no se reconoce un conflicto abierto, el desplazamiento extenso también ocurre. En Brasil, un informe de 2018 del Instituto Igarapé estimó que, de 2000 a 2018, al menos 8.855.752 brasileños fueron forzados a desplazarse en función de desastres naturales, violencia rural y emprendimientos de desarrollo. Uno de los principales motores de la migración forzada han sido los desastres, que provocaron el desplazamiento de 6.425.182 millones de personas (o el 72% del total de personas mapeado). Los proyectos de desarrollo, a su vez, desplazaron a 1.291.992 personas (14% del total de los mapeados) y la violencia rural un total de 1.138.578 (12%⁵⁹). Como ilustra el gráfico 3, una proporción significativa de esos flujos se concentran en los estados amazónicos, sobre todo Amazonas (848.217) y Pará (475.085).

Además de los desplazados internamente, crece el número de refugiados. En la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, las fumigaciones aéreas con glifosato —parte de la política de erradicación del cultivo de coca— también generan desplazamientos de campesinos, que sufren problemas de salud, incluso malformación en los recién nacidos, y la contaminación del agua, de la tierra, de las reses y otros animales⁶⁰. Desde 2016, la crisis en Venezuela, con falta de alimentos y medicina, y el creciente nivel de violencia y represión política, ha producido flujos de refugiados que se concentran en la Amazonía, y comunidades indígenas como los warao y wayuú estuvieron entre los primeros en partir desde Venezuela hacia Brasil, Colombia y otros países de la región⁶¹.

Otros impactos socioeconómicos

La raíz histórica de esta pobreza se encuentra en el proceso general de ocupación de la Amazonía, que frenó el extractivismo tradicional en la región, llevando a conflictos sociales y enfrentamientos por la tierra. Estudios han demostrado que, en muchas áreas deforestadas, los indicadores de calidad de vida son peores en las que han sido preservadas⁶². Eso se explica en parte por el hecho de que la deforestación destruye las fuentes de sustento e ingresos, pero existen también otros impactos, tales como la implementación del trabajo esclavo, sobre todo en la minería ilegal.

La propagación del crimen organizado y la degradación ambiental han acentuado la pobreza y creado nuevas formas de exclusión y explotación. Esto ayuda a explicar por qué las tasas de

⁵⁸ Martínez (2015).

⁵⁹ Folly (2018).

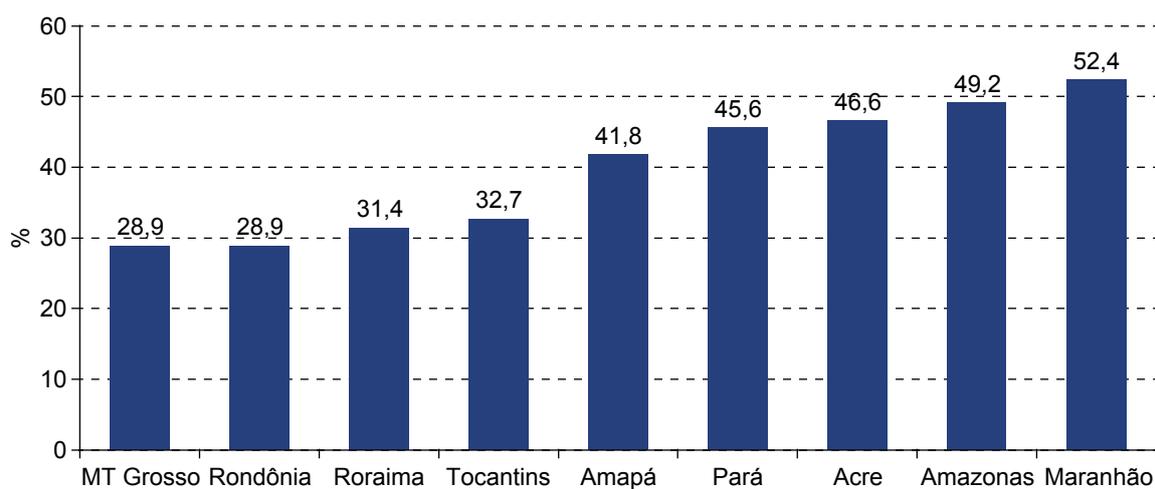
⁶⁰ RCN Radio (2014).

⁶¹ Faria y Williamsom (2018).

⁶² Escobar (2007).

pobreza y desempleo en la Amazonía se encuentran entre las más altas de América Latina, y el creciente vínculo entre el crimen organizado y el crimen ambiental en la cuenca amazónica tiende a producir nuevos focos de pobreza, exclusión social y explotación. En Ecuador, la Amazonía es la región con mayor índice de pobreza —casi dos veces mayor que la de la sierra y la costa⁶³—. En Brasil, los estados amazónicos tienen las tasas más altas de pobreza en el país; las dos tasas más altas se encuentran en los estados de Maranhão (52,4% de la población) y Amazonas (49,2%).

Imagen 11. Proporción de domicilios que poseen renta per cápita inferior a 5,5 dólares por día



Fuente: IBGE, Pnad Continua 2016.

Los grupos indígenas se ven especialmente afectados por estos índices de pobreza. Un informe de las Naciones Unidas concluye que en Brasil la incidencia de pobreza extrema entre los indígenas es seis veces más alta (18%) que entre el resto de la población⁶⁴. Tal dinámica está presente no solo en las áreas rurales de la Amazonía, sino también en las ciudades de la región⁶⁵. Un informe de las Naciones Unidas indica que a pesar de que se busquen mejores condiciones de vida en la ciudad, la mayoría de los indígenas en ciudades de la Amazonía brasileña viven en situación de pobreza, tienen dificultad para conseguir empleo y la principal renta viene de la artesanía. Generalmente, las comunidades indígenas en las ciudades de la región están ubicadas en un área de riesgo y tienen dificultad para acceder a servicios públicos de salud y educación. Existe desigualdad en el acceso a los servicios públicos.

La vulnerabilidad de estas poblaciones propicia la explotación, la prostitución y el tráfico de personas, perpetuando el círculo vicioso que une a la pobreza con el crimen, la degradación ambiental y la violencia.

⁶³ INEC (2015).

⁶⁴ ONU (2015).

⁶⁵ Paiva y Heinen (2017).

Conclusiones

Los vínculos entre el crimen organizado y la degradación del medio ambiente en la Amazonía aún no se conocen bien, pero claramente esta no es una relación unidireccional. La deforestación, la violencia, la pobreza y la desigualdad están interrelacionadas en formas complejas que tienen efectos profundos en la población del Amazonas, especialmente en grupos vulnerables como las comunidades indígenas.

Además de ser altamente heterogéneo, el papel del crimen organizado en la Amazonía varía a lo largo del tiempo. A medida que se abren nuevos incentivos y oportunidades para la actividad ilegal, los grupos y redes existentes se adaptan. El aumento en el precio del oro y la expansión de la minería a través de vastas muestras de la selva tropical reflejan la naturaleza dinámica del nexo entre el crimen organizado y la degradación ambiental.

La propagación del crimen organizado en actividades como narcotráfico, minería ilegal, tráfico de personas y lavado de dinero es un resultado no solo de la inmensidad del Amazonas y los desafíos para monitorearlo, sino también de la debilidad del Estado, sea debido a la baja capacidad o a la falta de voluntad política para actuar sobre esos temas.

Recomendaciones de actuación futura

Para enfrentar el problema de manera más efectiva, es necesario que los países de la región actúen a dos niveles: nacional y regional.

A nivel nacional, además de fortalecer la protección de los bosques y de los defensores de los derechos ambientales, los Gobiernos deben invertir en un mejor monitoreo, no solo de la deforestación, sino también de otras categorías de degradación ambiental. También se necesita un abordaje más eficaz con relación al crimen organizado, a partir de inversiones en la capacidad de investigación de las fuerzas policiales, fiscalías y otras agencias y divisiones públicas relevantes y capaces de contribuir a la desarticulación de las organizaciones criminales. Es necesario desarrollar espacios oficiales como comisiones nacionales.

También es indispensable potenciar la formación a través de las escuelas de formación policial y de derecho, e incorporar indicadores de gestión específicos para los crímenes ambientales.

A nivel regional, se necesita una mejor cooperación en varios frentes. Primero, existe la necesidad de un mayor intercambio de conocimientos y de información a través de las fronteras, a fin de rastrear las conexiones transnacionales que ayudan a impulsar a las principales organizaciones delictivas en la región. Tal cooperación debe englobar no solamente inteligencia, sino operativos, prevención, combate a la falsificación de documentos, modalidades de investigación económica y del cibercrimen.

La cooperación bilateral debe incluir a los equipos conjuntos de investigación, incluso específicamente contra la minería ilegal, y es importante apoyar operaciones conjuntas y coordinadas multisectoriales de prevención e interdicción.

Es particularmente importante que las agencias gubernamentales y las fuerzas que actúan en las áreas fronterizas estén facultadas para trabajar en conjunto, y que se creen espacios para que esto suceda de manera regular e institucionalizada (en lugar de *ad hoc*). La Secretaría General de la OTCA puede servir como espacio central en tales esfuerzos.

Existe también espacio para que se aumente la cooperación con otros actores, incluso Interpol y Europol. El papel de la sociedad civil es inestimable no solamente para el monitoreo de los crímenes y delitos, sino para la producción del conocimiento localizado y la investigación basada en evidencia.

En ambos niveles, es urgente la cooperación contra el lavado de dinero y otros crímenes financieros que permiten la ocultación de las actividades del crimen organizado en la región.

Bibliografía

ABDENUR, A. E. (2018). Environmental Rights: Threats to Activists in Brazil. *Climate Diplomacy*, 15 de octubre. Disponible en: <https://www.climate-diplomacy.org/news/environmental-rights-threats-activists-brazil>.

GARCÍA, V. (2007). La Amazonía: contexto, amenazas y perspectivas de una zona geoestratégica de disputa política. XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Guadalajara.

BBC MUNDO (2016). Declaran estado de emergencia por contaminación por mercurio en la Amazonía de Perú. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160523_peru_estado_emergencia_contaminacion_mercurio_mineria_ilegal_ab.

ESCOBAR, R. (2018). Perú: informe arroja alarmantes niveles de mercurio en Madre de Dios. Disponible en: <https://es.mongabay.com/2018/08/peru-mercurio-amazonia-mineria-ilegal-madre-de-dios/>.

LATINA REDACCIÓN (2018). Manu: de santuario natural a paraíso del narcotráfico. Disponible en: <https://www.latina.pe/noticias/punto-final/portada/manu-de-santuario-natural-a-paraiso-del-narcotrafico>.

ANESVAD (2014). La nueva «fiebre del oro» en Madre de Dios arrastra a mafias de explotación laboral y sexual infantil. Disponible en: http://www.anesvad.org/descargas/notas/denunciamos-la-trata-en-peru_2.pdf.

GLOBAL FOREST ATLAS. The Amazon Basin Forest. Disponible en: <https://globalforestatlas.yale.edu/region/amazon>.

LOVEJOY, T. y NOBRE, C. (2018). Amazon Tipping Point. Disponible en: <http://advances.sciencemag.org/content/4/2/eaat2340>.

FAO, UN (2015). Amazon basin: geography, population and climate. Disponible en: <http://www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/amazon/index.stm>.

WWF. Impacts of climate change in the Amazon. Disponible en: http://wwf.panda.org/knowledge_hub/where_we_work/amazon/amazon_threats/climate_change_amazon/amazon_climate_change_impacts/.

INFORME IPCC (2013). Quinto Informe de Evaluación del IPCC, GT I.

INFORME IPCC (2014). Quinto Informe de Evaluación del IPCC, GT II.

NEUGARTEN, R. (2017). These 7 maps shed light on most crucial areas of Amazon rainforest. Disponible en: https://blog.conservation.org/2017/01/these-7-maps-shed-light-on-most-crucial-areas-of-amazon-rainforest/?_ga=1.212112148.1032381366.1484920401.

- COLUMBUS, D. (2004). Sobre la naturaleza jurídica de los delitos ambientales. Disponible en: https://www.ecoportel.net/temas-especiales/contaminacion/sobre_la_naturaleza_juridica_de_los_delitos_ambientales/.
- TORRES, J. (2015). Nuevos desiertos avanzan detrás de la fiebre del oro. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16460299>.
- CANNON, J. (2015). Amazon gold rush destroying huge swaths of rainforest. Disponible en: <https://news.mongabay.com/2015/01/amazon-gold-rush-destroying-huge-swaths-of-rainforest/>.
- UAB (2017). La contaminación petrolera del Amazonas está modificando la composición química del agua. Disponible en: <https://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/la-contaminacion-petrolera-del-amazonas-esta-modificando-la-composicion-quimica-del-agua-1345667994339.html?noticiaid=1345734672816>.
- YUSTA-GARCÍA, R. *et al.* (2017). «Water contamination from oil extraction activities in Northern Peruvian Amazonian rivers». *Environmental Pollution*, Volume 225, 2017, Pages 370-380, ISSN 0269-7491, <http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2017.02.063>.
- AGOSTINHO, J. (2017). Derrumbes también causan pérdida de bosques en la Amazonía. Disponible en: <https://www.ecoamazonia.org.br/2017/12/derrumbes-tambien-causan-perdida-bosques-en-amazonia/>.
- MUGGAH, R. y TOBÓN, K. (2018). Citizen security in Latin America: Facts and Figures. Instituto Igarapé Strategic Paper 33, April: <https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Citizen-Security-in-Latin-America-Facts-and-Figures.pdf>.
- MUGGAH, R.; GARZÓN, J. y SUÁREZ, M. (2018). La mano dura: Los costos de la represión y los beneficios de la prevención para los jóvenes en América Latina. Instituto Igarapé.
- OLIVEIRA, F. (2015). Operação São Joaquim fecha as fronteiras do Amazonas para combater facções criminosas. Disponible en: <https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/operacao-sao-joaquim-fecha-as-fronteiras-do-amazonas-para-combater-faccoes-criminosas>.
- MUGGAH, R. (2016). Latin America's Fatal Gun Addiction. Instituto Igarapé. Disponible en: <https://igarape.org.br/en/latin-americas-fatal-gun-addiction/>.
- STOHL, R. y TUTTLE, D. (2008). The small arms trade in Latin America. Disponible en: <http://gsdrc.org/document-library/the-small-arms-trade-in-latin-america/>.
- SOUZA, S. (2016). Amazonas é rota do tráfico de pessoas para o Suriname, Venezuela, Suíça e Espanha. Disponible en: <https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/sexta-feira-traffic-co-de-pessoas>.
- WWF. Extracting valuable minerals and a Pandora's Box of problems. Disponible en: http://wwf.panda.org/knowledge_hub/where_we_work/amazon/amazon_threats/other_threats/amazon_mining/.
- CANNON, J. (2015). Amazon gold rush destroying huge swaths on rainforests. Disponible en: <https://news.mongabay.com/2015/01/amazon-gold-rush-destroying-huge-swaths-of-rainforest/>.
- SURVIVAL. Os Yanomami. Disponible en: <https://www.survivalbrasil.org/povos/yanomami/invasores>.
- ILO. Facts and Figures. Disponible en: <https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm>.

- ILO (2017). Forced Labour and Forced Marriage. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf.
- EB (2018). Cerca de 1.000 militares intensificam presença do exército junto à faixa da fronteira no estado de Roraima. Disponible en: http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/1-brigada-infantaria-de-selva-deflagra-operacao-curare-ix-no-estado-de-roraima-/8357041.
- THENÓRIO, I. (2009). Amazonia concentra maior parte de casos de trabalho escravo no Brasil. Disponible en: <https://reporterbrasil.org.br/2009/01/amazonia-concentra-maior-parte-de-casos-de-trabalho-escravo-no-brasil/>.
- OBSERVATÓRIO DIGITAL DO TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL. Disponible en: <https://observatorioescravo.mpt.mp.br/>.
- ANDREOLLA, A. (2017). PF faz operação para combater esquema de exploração ilegal de ouro no Amapá. Disponible en: <https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/pf-faz-operacao-para-combater-esquema-de-exploracao-ilegal-de-ouro-no-amapa.ghtml>.
- REPÓRTER BRASIL (2015). Amazônia: Trabalho escravo + dinâmicas correlatas. Disponible en: https://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2016/06/FINAL_folderAmz_2015_WEB.pdf.
- SHARMA, B. (2006). Contemporary forms of slavery in Peru. Disponible en: http://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/contemporary_forms_of_slavery_in_peru.pdf.
- THOMANN, L. (2011). Steps to Compliance with International Labour Standards: The International Labour Organization and the Abolition of Forced Labour. London.
- SHARMA, B. (2006). Contemporary forms of slavery in Bolivia. Disponible en: http://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/contemporary_forms_of_slavery_in_bolivia.pdf.
- NELLEMANN, C. (2012). Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the worlds tropical forests. United Nations Environment Programme (UNEP).
- GLOBAL WITNESS (2018). At what cost? Irresponsible bussiness and the murder of land and environmental defenders in 2017. Disponible en: <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/at-what-cost/>.
- O GLOBO (2018). Massacre de Pau D'Arco completa um ano: 10 mortes e muitas incertezas. Disponible en: <https://oglobo.globo.com/brasil/massacre-de-pau-darco-completa-um-ano-10-mortes-muitas-incertezas-22711202>.
- GLOBAL WITNESS (2014). Peru's Deadly Environment: The rise in killings of environmental and land defenders. Disponible en: <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/perus-deadly-environment/>.
- THE GUARDIAN. Colombian activists face «extermination» by criminal gangs. Disponible en: <https://www.theguardian.com/world/2018/aug/23/colombian-activists-face-extermination-by-criminal-gangs>.
- MONGABAY (2018). Pelea por la tierra: una guerra que se intensifica em el posconflicto de Colombia. Disponible en: <https://es.mongabay.com/2018/08/guerra-tierra-en-colombia-posconflicto/>.
- MONSALVE, M. (2018). Impunidad, el capitulo colombiano de los ambientalistas asesinados. Disponible en: <https://infoamazonia.org/es/2018/08/espanol-impunidad-el-capitulo-colombiano->

de-los-ambientalistas-asesinados/#!/map=49&story=post-18392&loc=1.1466294999999853,-76.64823270000001,7.

WWF. Climate change in the Amazon. Disponible en: http://wwf.panda.org/knowledge_hub/where_we_work/amazon/amazon_threats/climate_change_amazon/.

MARTÍNEZ, J. (2015). Nuevos desiertos avanzan detrás de la fiebre de el oro. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16460299>.

FOLLY, M. (2018). Migrantes invisíveis: a crise do deslocamento forçado no Brasil. Instituto Igarapé. Disponible en: <https://igarape.org.br/migrantes-invisiveis/>.

RCN RADIO (2014). Fumigaciones a cultivos ilícitos genera desplazamientos de campesinos em el sul del Caquetá. Disponible en: <https://www.rcnradio.com/colombia/fumigaciones-cultivos-ilicitos-genera-desplazamientos-de-campesinos-en-el-sur-del-caqueta>.

FARIA, F. y WILLIAMSON, N. (2018). Hunger, despair drive indigenous groups to leave Venezuela. UNHCR.

ESCOBAR, H. (2007). Desmatamento perpetua pobreza na Amazônia. Disponible en: <https://emails.estadao.com.br/noticias/geral,desmatamento-perpetua-a-pobreza-na-amazonia-diz-estudo,33365>.

INEC (2015). Reporte de pobreza por consumo – Ecuador 2006-2014. Disponible en: <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Libros/reportePobreza.pdf>.

ONU BRASIL (2016). Índigenas, negros e mulheres são mais afetados por pobreza e desemprego no Brasil, diz CEPAL. Disponible en: <https://nacoesunidas.org/indigenas-negros-e-mulheres-sao-mais-afetados-por-pobreza-e-desemprego-no-brasil-diz-cepal/>.

PAIVA, B. y HEINEN, M. (2017). Índigenas na cidade: pobreza e preconceito marcam condição de vida. Disponible en: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-04/indigenas-na-cidade-pobreza-e-preconceito-marcam-condicao-de-vida>.

GOBIERNO PERUANO (2014). Ley 30230. Disponible en: <http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/2014/JULIO/LEY30230.pdf>.

www.elpaccto.eu

EL PACCTO es un programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea que persigue promover la seguridad ciudadana y el Estado de derecho en América Latina a través de una lucha más efectiva contra el crimen transnacional organizado y de una cooperación fortalecida en la materia. Cubre los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Es la primera vez que un programa regional europeo trabaja en toda la cadena penal para fortalecer la cooperación a través de tres componentes (cooperación policial, cooperación entre sistemas de justicia y sistemas penitenciarios) con cinco ejes transversales (ciberdelincuencia, corrupción, derechos humanos, género y lavado de activos).

Programa liderado por



Socios coordinadores



PROGRAMA FINANCIADO
POR LA UNIÓN EUROPEA